

Quisiéramos analizar aquí, sumariamente, los hechos principales de la primera vuelta electoral, los cambios en las relaciones de poder político y societal que implican, el surgimiento de dos corrientes autoritarias confrontadas –no sólo una– y los riesgos pero también las posibilidades que todo ello comporta para la calidad de la democracia en el Perú. No se ha producido, como en países vecinos, «un viraje a la izquierda», pero sí un paso que podría llevar al sinceramiento de la política en relación con la sociedad de la que es parte. Esta podría expresar mejor los conflictos que pugnan por entrar a la agenda pública y, por eso mismo, contribuir a resolverlos institucionalmente en democracia.

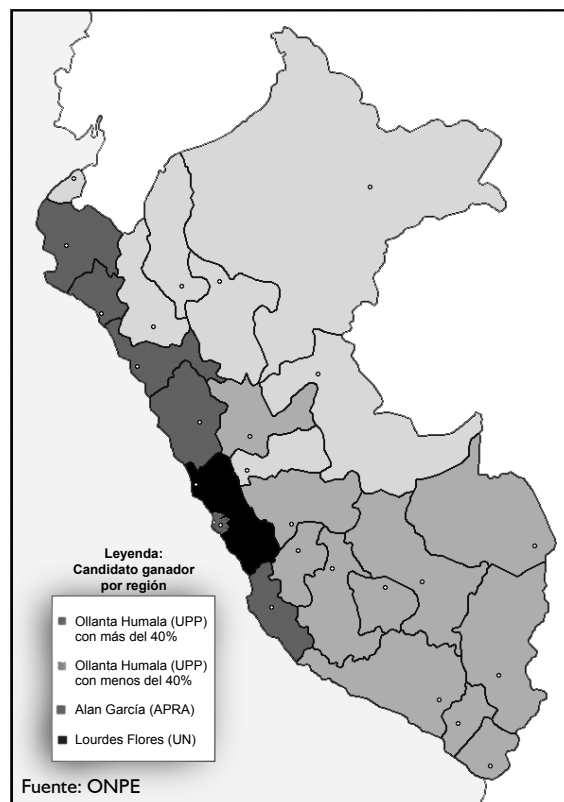
## Hechos y tendencias

La principal novedad de la primera vuelta, y que tomó forma solo en el último tramo, fue el reemplazo de Lourdes Flores por Alan García y la eliminación de la candidata de la decisiva ronda final. Este hecho dejó desconcertados a la mayoría de líderes de opinión, a los principales medios de comunicación y a los grupos de poder que sostienen esta «opinión pública» demasiado limeña, como las propias cifras electorales lo acaban de atestiguar. Lourdes Flores representó, de hecho, la opinión mayoritaria del gran empresariado y por tanto la apuesta por la continuidad de la política económica, que viene de las liberalizaciones radicales que Alberto Fujimori llevó a cabo a comienzos de la década de 1990. Los principales grupos de poder económico han quedado sin candidato propio a la presidencia en la segunda vuelta. Nada menos que eso.

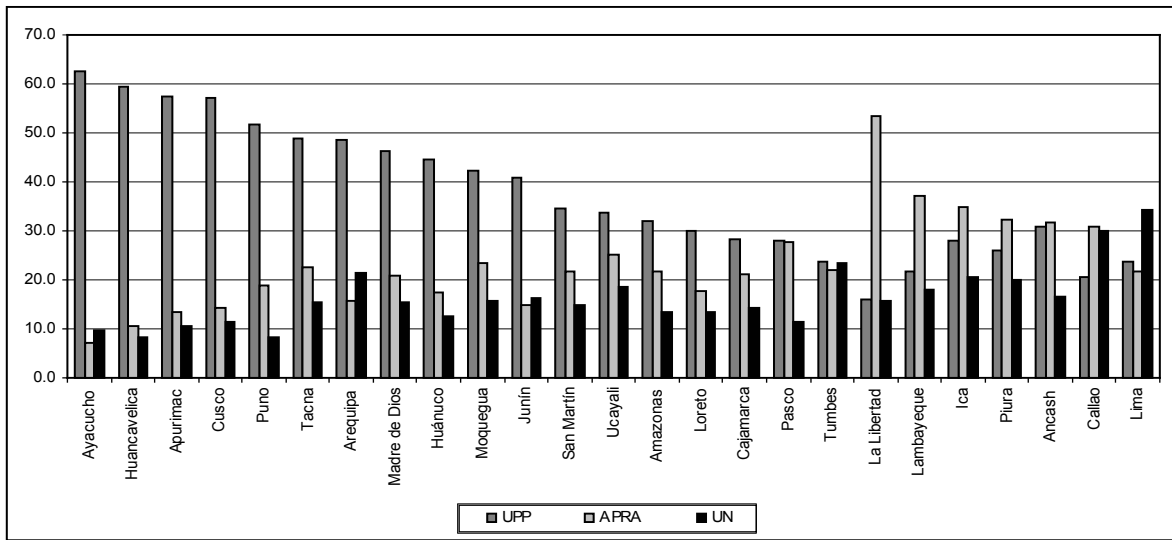
Hay que dejar constancia de que esa candidatura fue, sin embargo, más que un bloque de poder y una política económica. A mi juicio, Lourdes Flores puso énfasis en la comunicación directa con los sectores populares y en ese sentido hizo una campaña meritoria. Como el futuro de la democracia peruana depende más de que los principales grupos económicos acepten la legitimidad del pueblo a expresar su insatisfacción por el desempleo y la pobreza, que de la violencia de grupos confrontacionales aislados, el precedente dejado por Flores es valioso y hay que esperar que ella o sus seguidores genui-

nos sigan en la representación política de las derechas. El crítico tema de la desigualdad tiene que enfrentarse y eso implica la aplicación de medidas redistributivas. Flores apuntó ahí en el discurso cuando, desde las fronteras de su opción, señaló la insuficiencia del crecimiento macroeconómico y la expectativa en «el chorreo».

En segundo lugar, la previsible victoria de Ollanta Humala ha tenido el límite relativamente reducido de 31%, pero ha alcanzado a ser primera mayoría en 18 de los 24 departamentos del país. Su votación ha sido menor de lo que se preveía, pero más extensa territorialmente. Es, por ejemplo, segundo en Lima y en los departamentos del norte. El mapa y el cuadro de los resultados del voto presidencial que acompañan este texto explicitan, así, otro gran tema de esta elección: el de la regionalización política de la votación. Existe una alta correspondencia entre, por una parte, la opción electoral y, por la



**Candidatos ganadores por departamento**  
% votos válidos



Resultados al 99.980% de actas computadas

Fuentes: ONPE Consulta hecha el 02/05/2006 <http://www.elecciones2006.onpe.gob.pe/>

Elaboración propia con la colaboración de Verónica Sifuentes.

otra, el nivel de ingresos y la vinculación o el aislamiento territorial respecto a los circuitos más modernos. La expansión desigual de la economía y la modernización corresponden con el voto de la sierra centro y sur, que optó casi al 50% por Humala. Por eso, el mapa presenta diferenciadamente las regiones en las que él obtiene o más o menos de 40%. En la costa norte, de un agro más exportador y ciudades dinámicas, el APRA mantuvo su ventaja histórica, aunque estrechamente. Solo en Lima, pese a sus enormes desigualdades, pudo ganar Flores.

Regresando al candidato Ollanta Humala, los antecedentes violentistas del movimiento etnocacerista sobre los cuales se convirtió en figura pública los años anteriores, el carácter militar de parte de su poco conocido entorno y la cercanía a Hugo Chávez crean comprensible desconfianza sobre su compromiso con el pluralismo y las libertades. Se han presentado también denuncias serias que lo vinculan con violaciones a los derechos humanos en su actuación militar. Sin embargo, estas fundadas preocupaciones no tendrían que haber llevado a que actores públicos tan importantes como la mayoría de los medios de comunicación emprendieran una campaña de demolición que abarcó incluso los segmentos teóricamente «noticiosos», sin respetar la legitimidad elemental que, como todas las otras, tiene esa candidatura. El temor es un sentimiento fácil de azucar por parte de quienes manejan la información masiva. El problema es que ellos están agravando la distancia y la incomunicación social ya existente, porque aunque sea

en términos frecuentemente autoritarios y criticables, la candidatura de Humala ha planteado un programa nacionalista de modificación de la política económica y revisión de contratos de exoneración tributaria de grandes empresas que es polémico, pero que tiene racionalidad en sí mismo. Esta propuesta ha dado más contenido al debate nacional y ha despertado el apoyo de las regiones postergadas. Sin embargo, el ataque de actores privados que cumplen un rol de información pública ha llegado hasta los votantes de esta opción. Ellos han sido tachados de ignorantes –por lo menos– por personas que hablan, con obvia inconsecuencia, en nombre de la democracia y la libertad de expresión. Así, pues, al autoritarismo de Humala se le ha opuesto otro que, felizmente, no ha tenido el liderazgo de una candidatura adversaria pero sí el de una convergencia de actores mediáticos y políticos. Sus representantes se han enfrentado a veces con Humala con la misma agresividad y simplificación que se le achacan a él y a sus seguidores.

Tal campaña le debe de haber quitado a Humala un porcentaje importante de votación, mas no la victoria presidencial y parlamentaria. Mirando hacia la segunda vuelta, ha quedado debilitado por su aislamiento de los otros grupos, pero a la vez está bien colocado, pues en los comicios del próximo noviembre podría consolidar representaciones políticas efectivas en los niveles regional y municipal de muchos lugares. Habría surgido, entonces –aunque también es posible que se divida y se disperse–, una representación política de sectores em-

pobrecidos que no la tuvieron desde fines de la década de 1980, con la desaparición de las izquierdas.

En tercer lugar, Alan García y el APRA resultaron, por experiencia electoral y capacidad de organización, los más favorecidos. Su táctica, finalmente exitosa, de mo-tejar siempre a Lourdes Flores como «la candidata de los ricos» le generó contraataques basados en el recuer-do de la catástrofe de su primer gobierno, pero ahora García, segundo solo por décimas, goza de buenas po-sibilidades de ser presidente del Perú otra vez, pues los rasgos de Humala permiten su eventual arrinconamien-to a un extremo del espectro político. García gozará, en cambio, de la parte principal del apoyo conservador, aunque repita su discurso centrista, que en la tradición aprista busca conciliar el crecimiento económico sobre la base de negociaciones con el capital privado, con un rol redistribuidor del Estado. Sus debilidades más serias son el alto rechazo activo y la profunda falta de cre-dibilidad que se ha ganado. Por este motivo, se habla tanto de «voto en blanco» y se mantiene un margen de incertidumbre sobre la segunda vuelta.

Pero detengámonos aquí. ¿Qué significa, como riesgo y como posibilidades para construir democracia en el Perú, este nuevo escenario político? Para discutir este tema, creo necesario extender primero la mirada al proceso de la democracia contemporánea.

### *La democracia comporta hoy una tarea doble*

Es indispensable recordar que la democracia moderna que conocemos, primero, no fue un producto espon-táneo, y segundo, tampoco resultó de la victoria de una sola corriente de pensamiento. Ella surgió de una opción deliberada por el diálogo, y no por la violencia, producido entre los líderes de las diversas y confronta-das ideologías y bloques de intereses económicos del siglo XX en Europa –liberales, socialcristianos, socialis-tas, comunistas–. Los conflictos sociales empujaron, allá como aquí, a la negación del otro, a la violencia, pero después de la experiencia devastadora de las guerras mundiales y el final del fascismo, se impuso la preferen-cia por los acuerdos sociales y políticos, que son los que se formalizan y dan legitimidad social en democracia a las leyes y al Estado.

Ese proceso implicó –y esto es también relevante para nosotros– que los conflictos entre las clases sociales del capitalismo se procesaran al interior de institucionalida-des democráticas. El resultado fue la organización políti-co-económica híbrida, en la cual la libertad de mercado y la regulación estatal se combinan, hasta hoy, según

las relaciones de poder y los rasgos históricos de cada país.

El desarrollo de circuitos mundiales globalizados ha añai-dido otra dificultad para la democracia. Son las relacio-nes de mercado las más fuertes en ese plano, sin que exista aún institucionalidad de gobierno internacional suficientemente fuerte como para establecer regulacio-nes y hacer valer los derechos ciudadanos básicos de todos los seres humanos, cuya igualdad es el fundamen-to de la democracia. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la situación mundial es aún más preocupante, pero apenas si podemos mencionar aquí este contexto. El no es ajeno, sin embargo, al actual re-vivir de los nacionalísimos.

El itinerario latinoamericano tuvo sus propios rasgos y, desde hace tres décadas, una constatación analítica reconocida es que si la democracia no se consolida es porque no existen en nuestros países condiciones so-cioeconómicas mínimas aceptables para todos. En los países andinos venimos de sociedades desiguales y dis-criminadoras, en los que la marca colonial, que separó en dos repúblicas a indios y españoles, está presente aún, con todos los traumas y rechazos mutuos que, con dolor, constatamos que llegan hasta el presente. Por eso debemos valorar que los avances en el proceso de reconocernos y aceptarnos unos y otros como somos, sin recurrir a la violencia y criticando –al menos– las dis-criminaciones se haya convertido, durante los últimos años, en la aspiración dominante en el Perú. La consis-tencia de esta opinión mayoritaria está bien comprobada por todas las evaluaciones hechas. No era esa la realidad hace cuatro décadas y por eso se puede señalar que ha concluido el ciclo de un tipo de izquierda que creyó que la guerra revolucionaria era positiva e inevitable.

El problema presente estriba en que no hemos cons-truido acuerdos legales –o políticas efectivas que los pongan en práctica– para garantizar condiciones de tra-bajo y de vida asequibles a todos. Por eso el Estado pe-ruano no es reconocido como democrático por tantas personas. Luego de 15 años, el ciclo político de hege-monía neoliberal que comenzara en la década de 1990 no parece haber ayudado a la legitimación de nuestras instituciones políticas ni a la justicia social. Es esto lo que nos están diciendo nada menos que los documentos pú-blicos de la banca multilateral y de organismos de Na-ciones Unidas como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es sorprendente que estas realidades no estén siendo

tomadas en cuenta por tantos articulistas, algunos ilustres, que en su crítica a los riesgos autoritarios de Humala abstraen la dimensión socioeconómica, central precisamente para quienes han convertido al comandante en figura nacional. Se olvida, así, que en el Perú –y finalmente en todas partes– la democracia comporta una doble tarea: la del respeto a la ley –es decir, el sometimiento del autoritarismo– y también la de reducir efectivamente la pobreza y la desigualdad, que durante estos años más bien aumentaron. Hay que garantizar, junto con elecciones limpias y respeto irrestricto del gobierno a los otros sectores, un crecimiento que esté asociado con la redistribución. Además, es esencial el trato cultural respetuoso a quienes se sienten pobres pero también, y es quizá lo más grave en nuestro país, discriminados y excluidos. Una lectura detallada de los resultados de esta elección mostraría que la mayoría neta del electorado ha votado precisamente por esta clase de orientación, que busca enfrentar tanto las tareas políticas como las económicas. Este momento del país nos trae pues, junto a sus riesgos y quizá por ellos mismos, una posibilidad de coexistencia y de protagonismo democrático compartido entre distintas tendencias políticas que no debiera desaprovecharse.

### *Consecuencias para lo inmediato*

Las dos candidaturas que se enfrentan en esta segunda vuelta tienen un conjunto complejo de fortalezas y debilidades. La política, en el Perú y en todas partes, nos somete con frecuencia a opciones que no son de nuestro agrado personal, pero que resultan de las decisiones legítimas del colectivo del que formamos parte. Medio país elegirá probablemente a disgusto, pero esta no es una situación tan excepcional. La historia de los países se construye desde cada uno de sus momentos de elección pública y quizá lo mismo podría pasar pronto en Estados Unidos o en Francia.

Desde el campo del análisis en el que he querido situar este artículo, hay que recordar que la responsabilidad de responder a aquel reto bifronte de nuestra precaria democracia dependerá no solo de quien gane sino de un amplio espectro de protagonistas: de los líderes de las otras fuerzas políticas principales –que se extienden hasta seis si consideramos a las que contarán con representación parlamentaria– pero también de los grupos privados de poder público, económico y mediático, de los actores internacionales y de una sociedad civil activa, que tendrá que repensar sus mecanismos de impacto en la opinión pública.

Un Perú con tres regiones políticas tan distintas como se nos acaba de manifestar no tiene entonces una sola experiencia de sociedad y de «camino correcto» hacia delante. Tiene tres y más. Sin embargo, como Francis Fukuyama –el mismo de aquel supuesto «fin de la historia» de 1990– acaba de recordarlo, de cómo construyamos nuestras instituciones estatales y públicas depende el futuro que tendremos los países en el siglo XXI. En medio de nuestra división, la mayoría de líderes y de sentidos comunes apuestan porque encaremos la democracia con sus dos tareas y reconocen que los peruanos de las distintas regiones geográficas y políticas somos interdependientes y tenemos que vivir juntos.

Es en este sentido que dijimos al comienzo que la política se ha sincerado y podría expresar algo mejor a nuestra sociedad, con sus incomunicaciones y sus avances también, tal cual son. El Perú tiene posibilidades económicas favorables que no deben desaprovecharse y la continuidad de sus principales procesos en ese campo debe ser asegurada, sin que eso implique que sean políticamente intocables. Es un ejercicio difícil pero los países exitosos y democráticos han pasado justamente por él.

Quizá tenemos la ventaja de que tanto el Perú más liameño y moderno como el más andino y pobre han visto que no son mayoría por sí solos. Contribuir a enfrentarlos no sería solo irresponsable sino suicida. Además, este contexto puede permitirles a nuestras instituciones estatales, débiles e ineficaces, organizar su reforma no solo tras una eficiencia definida unilateralmente sino por el reconocimiento superior que surja de la concordancia de los distintos grupos de peruanos. Fue mucho de esto mismo lo que el Informe de la Comisión de la Verdad buscó poner en el debate público.

El Perú políticamente anodino, del que con razón nos quejábamos, por ahora ha dejado de existir. Durante un tiempo, la política nacional se ha vuelto relevante para ciudadanos y ciudadanas comunes. Los riesgos de imposición, violencia, juego sucio, miedo y simplificación probablemente van a convertirse en parte en realidad. Ocurrirá lo mismo con las componendas para apañar la corrupción, tema no tratado aquí. Lo que no está predeterminedo, lo que depende en lo inmediato de los protagonistas centrales y luego de todos, es que esos no sean los hechos que prevalezcan. Airear en democracia todos los temas y escucharnos con respeto mutuo es la metodología –exigente pero factible– para avanzar como país y también para superar, en el mejor de los sentidos, a todos los autoritarismos. ■